

SISTEMA POLÍTICO Y ACTORES SOCIALES EN CHILE

Eduardo Valenzuela

SUR Profesionales Consultores

La recuperación de la democracia chilena se caracteriza principalmente por la formación de sistema político, esto es, un sistema plural de actores políticos recíprocamente orientados entre sí. La noción de "sistema político" comprende, en este sentido: (a) la emergencia de actores que se definen por referencia a un mecanismo institucional de toma de decisiones, y (b) la emergencia de actores que se orientan a través de la acción de otros. El sistema político no se limita, por lo tanto, al reconocimiento mutuo de reglas del juego, de normas y procedimientos que regulan el acceso al poder. También debemos agregar la orientación recíproca: la capacidad de interlocución entre los diferentes actores y el monto de intercambios que se establezca entre ellos. Puede existir adhesión unánime a los procedimientos democráticos, pero en el marco de un sistema político polarizado, con un mínimo de acción recíproca (como ocurrió en Chile en los años previos al golpe militar de 1973): en el límite, dichos sistemas no operan como tales, vale decir, como conjunto de actores mutuamente referidos.

LA REVALORIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Esta definición de sistema político juega un rol estratégico en el advenimiento de la democracia en Chile. En esta sección se harán algunas indicaciones acerca de la forma en que se reconstruye este concepto. Dos procesos diferentes concurren a esta formación: en primer lugar, la crítica del radicalismo político de los años sesenta que se hizo en nombre de la "revalorización de la democracia" y, más aún, de la "secularización de la política"; en segundo lugar, el examen crítico acerca del quiebre de la democracia chilena que se explicita como "crisis de consenso" y polarización del sistema político. La diferencia entre radicalización y polarización política, a pesar de sus vinculaciones evidentes, debe ser mantenida: más adelante se encontrarán las razones que fundamentan esta distinción.

La revalorización de la democracia es el *leit motiv* de una intelectualidad radical que experimenta los regímenes autoritarios como crisis del proyecto revolucionario. Esta crisis, sin embargo, no se hace evidente en forma inmediata. En un primer momento, el renacimiento de una ideología democrática asume la forma de una crítica al leninismo,¹ definido como una concepción estatista del poder. La teoría leninista del "partido-vanguardia" y de la "destrucción del estado burgués" como núcleo del proyecto revolucionario pierde consistencia y oportunidad histórica. La crítica al leninismo, sin embargo, no introduce todavía el tema del desencantamiento que remite al problema de la factibilidad histórica del proyecto revolucionario: en términos generales, esta crítica sustituye simplemente el concepto de "revolución" por el de "hegemonía". La política es todavía proyecto que, no obstante, deja de estar radicado en minorías activas y orientado, al menos inmediatamente, hacia la conquista del poder estatal.

Las modificaciones del leninismo son muchas: el concepto gramsciano de "hegemonía" es particularmente importante, pero también la "teoría de los movimientos sociales" en sus múltiples versiones. Todas estas modificaciones guardan todavía escasa relación con el concepto de sistema político: su propósito es reencontrar el principio de historicidad quebrantado en la "sociedad civil" o en los "actores sociales" (y en su versión más ideológica, pero también más importante, en el "pueblo", lo cual dará origen, como se verá más adelante, a una ideología específicamente populista). En todos los casos --"bloque histórico", "movimiento social", "pueblo"-- se trata de la reconstrucción de un sujeto histórico orientado fuera del sistema institucional. Las modalidades de constitución de ese sujeto son el trasfondo del debate con el leninismo. Al respecto, podemos señalar esquemáticamente tres objeciones principales: (a) la crítica de una concepción de la política entendida como cálculo de relaciones de fuerzas, que Lenin hereda de Clausewitz, y la apertura hacia una representación de la política como creación de hegemonía, vale decir, como construcción de reconocimiento y legitimidad subjetivas; (b) el cuestionamiento del criterio de validación del proyecto revolucionario por referencia a un saber objetivo y, por lo tanto, exterior a la conciencia espontánea o ingenua de los actores sociales, lo que dará como

resultado una revalorización del potencial propio de esos actores; y (c) el reemplazo de un análisis de clase, vale decir, de actores definidos por referencia a una situación objetiva (por ejemplo, inserción dentro de un determinado modo de producción) por un análisis de los actores definidos como praxis histórica, esto es, como conciencia de sus propias determinaciones y de su superación.

Un examen más detallado de los modos en que se descompone la tradición leninista escapa a los propósitos de este trabajo. Observaremos simplemente que ninguna de estas modalidades confluye hacia el concepto de "sistema político". Todas estas modificaciones siguen operando al interior de una "teoría del sujeto" que se constituye políticamente como Príncipe, movimiento social o pueblo.

El concepto de "sistema político" se forma en una tradición diferente. Distintos autores realizan la conexión entre revalorización de la democracia y "desencantamiento del mundo".² La noción de desencanto remite a la tesis weberiana acerca de la escisión entre "ser" y "deber ser", cuyas modalidades básicas son la distancia entre Dios y mundo en el plano de la religión (secularización), la heterogeneidad entre juicios de valor y juicios de hecho en el plano de la ciencia (lo que da las metodologías positivistas de las ciencias sociales) y la heterogeneidad entre política, definida como el uso legítimo de la violencia, y valores, cuyo modelo es la ética de la fraternidad universal del amor al prójimo del Sermón de la Montaña (lo que constituye la noción weberiana de "ética de la responsabilidad"). Todas estas modalidades del desencantamiento remiten a una misma conclusión: la imposibilidad de realizar o constituir históricamente fines últimos. La crítica weberiana es un cuestionamiento, por lo tanto, a la naturaleza misma del proyecto revolucionario como pretensión de realizar plenamente los valores en el mundo histórico. Las consecuencias de esta crítica se resumen en el llamado a "secularizar la política", definido por Lechner como "desacralización de los principios políticos" (vale decir, la suspensión de juicios que presumen una validez objetiva, lo que constituye el núcleo de toda ideología), como cuestionamiento de la razón utópica cuyo fundamento era su representación como meta históricamente factible, y finalmente como abandono del punto de vista de la totalidad entendida como "identidad plenamente realizada" y abolición de las diferencias sociales (Lechner 1990, pp. 107-108). Las modalidades de secularización de la política asumen distintas formas, que sólo podemos indicar brevemente. Algunas de ellas conducen al abandono del campo político propiamente tal: es, por ejemplo, la conexión entre democracia y cultura posmoderna como la establece Lechner. "El llamado a la secularización de la política puede apoyarse en la cultura post-moderna en tanto ésta implica cierto desvanecimiento de los afectos, propiciando una conducta 'cool' e irónica. En este sentido la 'moda' internacional contribuye a enfriar la carga emocional de la política, disminuyendo las presiones y, por tanto, permite al ámbito político, adquirir mayor autonomía . . . La cultura post-moderna asume la hipersecularización en su tendencia a escindir las estructuras sociales de las estructuras valorativas, motivacionales, emocionales" (Lechner 1990, p. 111). En términos generales se acepta, sin embargo, que el ámbito político no puede constituirse sin referencia a valores. La noción weberiana de "ética de la responsabilidad" cumple, en este marco, un papel más decisivo. En términos formales, una ética de la responsabilidad implica hacerse cargo de la situación existente, de los medios disponibles y, sobre todo, de las consecuencias de la propia acción. Esta evaluación falta en una "ética de la convicción", que se constituye fuera de todo cálculo de este tipo. La ética de la responsabilidad se constituye como reconocimiento de los límites de la actividad política, que proceden de su propia naturaleza, como ejercicio de la dominación y uso de la violencia. La política es siempre pretensión de dominio, por lo que su heterogeneidad respecto de valores últimos es completa. Ética de la responsabilidad significa, por lo tanto, orientarse con plena conciencia de esta heterogeneidad radical: es, ante todo, el reconocimiento de la imposibilidad de realizar, a través de la política, fines últimos.

La ética weberiana de la responsabilidad ha tenido fuertes repercusiones en la representación de la actividad política y en la reflexión acerca de la democracia. La conexión entre éticas de la convicción y violencia política ha sido la principal. Dicha conexión aparece obviamente en el caso de los regímenes autoritarios, que eluden sistemáticamente toda responsabilidad moral frente a las consecuencias --deseadas o no deseadas-- de la represión política. Pero también aparece en el caso de la violencia revolucionaria, sobre la que abundaremos más adelante: en todos los casos, la violencia se legitima por referencia a valores absolutos, vale decir, como imperativo ético. Las éticas de la convicción no resisten, pues, su encuentro con el poder: la conexión ética de la convicción-poder-violencia política se da como una conexión necesaria. Esto tiene dos importantes consecuencias. En primer lugar, la evacuación de las éticas de la convicción del espacio propiamente político ("la política no es el lugar donde salvar el

alma") y la reaparición del tema de la "responsabilidad" como ética profesional de la clase política. En segundo lugar, y como contrapartida, el reposicionamiento de las éticas de la convicción fuera de toda perspectiva de poder y de toda pretensión de dominio. En el primer caso, estamos frente a la constitución de sistema político propiamente tal; en el segundo, frente a figuras que van desde la "opinión pública" (como agregación de éticas particulares) hasta los llamados "nuevos movimientos sociales" (que dejan de orientarse políticamente en el sentido weberiano, vale decir, de estar referidos a la conquista del poder). Esta neutralización política de las éticas de la convicción es, sin duda, uno de las principales consecuencias de la reflexión weberiana y uno de los soportes de la ideología democrática en boga.³

La ética weberiana de la responsabilidad no es la única, ni tal vez la más importante modalidad que asume el proceso de secularización de la política. También debemos mencionar la "ética del consenso", que apunta todavía más directamente a la formación de sistema político. El tema del consenso deriva también del desencanto del mundo: desencantamiento es reconocimiento del "pluralismo de los valores", vale decir, del carácter esencialmente subjetivo de las valoraciones humanas y, por consiguiente, de la imposibilidad de construir un orden con validez objetiva. Dentro de la perspectiva del desencantamiento, sin embargo, la construcción de consenso no será vista como creación de una voluntad o conciencia colectiva: el concepto gramsciano de "hegemonía" es todavía una apelación a reconstruir la totalidad, a superar las diferencias de punto de vista y realizar una identidad común. El recurso a las teorías contractualista de la democracia ofrece una representación más adecuada: el consenso es simplemente acuerdo que carece de toda pretensión de realizar la totalidad.

El fundamento de este acuerdo es motivo de un largo debate. En términos generales, se rechazan todas las teorías que lo alojan en el equilibrio o compromiso de intereses materiales, lo que daría como resultado una concepción de la política como "mercado político" o "estado de compromiso". Flisflish hace notar la hipersecularización de este modelo y su "incapacidad de elaborar adecuadamente la categoría de interés público". La recomposición de la democracia en los marcos de un estado de compromiso --como el que existió con anterioridad a la crisis democrática-- ha merecido, en efecto, distintos reproches: en particular, el carácter puramente instrumental de la lealtad democrática de los actores comprometidos. El núcleo de la reflexión acerca de la democracia consistirá precisamente en distinguir criterios específicos de validación del régimen democrático que no remitan a ámbitos de realidad diferentes. La desconexión entre política y cultura en el sentido descrito más arriba corre paralelamente a la desconexión entre política y economía. El principio de legitimidad democrática debe estar al abrigo de toda consideración acerca de su eficacia como mecanismo de organización y regulación de los intereses económicos, lo cual obliga a "buscar para la política un fundamento ético inmanente a ella", según las palabras de Flisflish.⁴

Más importante han sido las reflexiones propiamente institucionales acerca de la democracia. La presunción de que un orden democrático puede fundarse en el respeto, comúnmente acordado, a ciertas reglas y procedimientos formales que regulan las diferencias y conflictos sociales ha gozado de mucha mayor estimación. El punto central en este caso ha sido la recuperación de la dimensión estrictamente procesal de la democracia, incluso como núcleo de toda definición correcta y de toda orientación legítima hacia ella. La democracia como "reglas del juego" remite el problema del orden a la presencia de estructuras de coordinación puramente formales entre los sujetos, similares a las que constituyen el mercado como espacio colectivo. Como en este caso, también el análisis se concentra en la naturaleza de las reglas (que reemplaza el derecho contractual por el derecho público, especialmente constitucional) y en el funcionamiento del sistema (que reemplaza las teorías del equilibrio de mercado por teorías de la estabilidad democrática).

La fundación del orden democrático sobrepasa, sin embargo, la reflexión meramente institucional. Lechner recoge esta preocupación de la siguiente manera: "las 'reglas del juego' de por sí no ofrecen seguridad, pues su significación reside fuera de ellas, en lo que suele denominarse el 'espíritu de las leyes'. Donde el principio regulativo --el sentido del orden-- es objeto de conflicto, la controversia relativiza de inmediato los procedimientos formales" (Lechner 1987, p. 149).

La búsqueda de un principio de legitimación cultural de la democracia anima la mayor parte de los escritos de los autores reconocidos en este campo. Para abreviar, diremos que dicho principio se formula como una "ética formal del consenso", que Flisflish identifica con una recuperación de la "dimensión

comunicativa y deliberativa de la política" (Flisflish 1987, p. 292). La ética del consenso difiere en este sentido de la ética weberiana de la responsabilidad: la política no elabora solamente pretensiones de dominio, sino fundamentalmente pretensiones de validez. Este oscurecimiento de la problemática del poder es característico de la reflexión acerca de la democracia que comentamos: la posibilidad de cooperar y llegar a acuerdos se impone por encima del ejercicio de la coacción legítima. La política se define menos como la búsqueda de legitimación de una voluntad de dominio, y más como la búsqueda de consenso entre actores plurales y diferentes, que suspenden justamente dicha pretensión de dominación. Naturalmente no se trata de una actitud ingenua: el consenso, como eliminación del poder, permanece como un concepto trascendental, históricamente inalcanzable (de lo contrario, nos alejaríamos otra vez de la tesis del desencantamiento), pero debe operar como ideal regulador de la actividad política, al modo de los conceptos-límites kantianos, vale decir, como un postulado puro de la razón práctica que informa y orienta la vida política.

LA RECOMPOSICIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO

La recuperación de la democracia como restitución de una ética de la responsabilidad y una ética del consenso puede verse también en el análisis de los procesos políticos. Dos son los puntos esenciales en este caso: el análisis de la crisis democrática chilena y el análisis del proceso de redemocratización. La tematización de la crisis democrática como "crisis de consenso" es lo que importa en el primer caso.⁵ Casi todos los autores remiten esta crisis a la desestabilización del Estado de compromiso en los años cincuenta, fundado en una suerte de "consenso industrialista" (articulación de empresarios y trabajadores bajo la tutela del Estado en torno a un proyecto de desarrollo hacia adentro) y en un "arreglo democrático" (basado a su turno en una lealtad relativamente generalizada frente a las reglas del juego democrático y, sobre todo, en la capacidad del sistema político de producir coaliciones de gobierno). Ahora bien, la crisis de este modelo fue tematizada entonces como crisis estructural, vale decir, como incompetencia del sistema frente a los requerimientos de participación e integración social que provienen de una sociedad movilizada. Toda esta trayectoria es bien conocida: la crisis es vista como crisis de modernización y remite, por lo tanto, a la pertinencia del modelo de desarrollo y de regulación económica. La consecuencia de esta representación de la crisis será la inauguración de lo que el historiador chileno Mario Góngora llamará la "época de las planificaciones globales" (la "revolución en libertad" freista, "el socialismo a la chilena" de Allende y la "revolución silenciosa" del régimen militar), esto es, la emergencia de proyectos globales de transformación y refundación de la sociedad. Dichos proyectos, por último, repercuten desastrosamente sobre el sistema político en una doble dirección: primero, por la aparición de ideologías radicales, ya sea de cuño autoritario o revolucionario, que retiran su lealtad al régimen democrático; y segundo, por la aparición de un "centro excéntrico", según la elegante expresión de T. Moulian, vale decir, de un centro político anticoalicionista, portador de un proyecto con pretensiones hegemónicas, cuyo efecto será la polarización del sistema político (v.gr. la división catastrófica del escenario en tres tercios, cada uno de los cuales elabora un "camino propio"). La distinción entre radicalización y polarización es sociológica y políticamente relevante. El radicalismo opera fuera del sistema político (de hecho, fue un fenómeno de origen y audiencia sobre todo universitaria) y tiene, usualmente, pocas oportunidades de producir quiebres democráticos. La polarización, en cambio, se genera al interior del sistema político y sus consecuencias son más devastadoras. La convergencia de ambos fenómenos, por ejemplo muy nítidamente en la víspera del golpe militar, produce un efecto catastrófico que no debe, sin embargo, ocultar la diferencia señalada: las oportunidades de expansión del radicalismo político remiten a una situación previamente dada de polarización del sistema político como tal. El origen del quiebre democrático debe encontrarse, por lo tanto, al interior del sistema político: sobre todo en la ausencia de un "centro pragmático" y en la erosión de la voluntad concertacionista de sus concurrentes.⁶

La conexión entre quiebre democrático y polarización política deja pendiente la explicación acerca de sus orígenes y motivaciones. La tesis de A. Valenzuela en este punto es fundamental: "la competencia política precedió y, de hecho, aceleró el conflicto de clases. Generalmente, las crisis económicas preceden a las crisis políticas; en este caso, el proceso fue a la inversa" (Valenzuela 1978, pp. 27-28). El quiebre del consenso político no remite, por lo tanto, a factores socioeconómicos: no existe evidencia de crisis económica propiamente tal (pese a disminuciones en el ritmo de crecimiento), y menos aún de desbordes sociales. Antes bien, la crisis económica y la polarización social son inducidas por el exceso de competencia política. La conexión entre polarización y/o radicalización política y crisis estructural ha

fallado en todos los casos. La crisis de consenso encuentra una explicación más verosímil en la "inflación ideológica", vale decir, en la voluntad hegemónica de los actores comprometidos, y en la configuración institucional del régimen democrático (por ejemplo, en un régimen que permitía la formación de gobiernos de minoría). Haciendo aparte los factores institucionales que impedían la regulación adecuada de la competencia política (factores que conducirán a propuestas de reforma del régimen de gobierno en el sentido del parlamentarismo, entre los cuales destacan los estudios posteriores del propio Valenzuela), la crisis de consenso remite finalmente a sí misma: es simplemente la pérdida de la voluntad de cooperación de los actores políticos.

Este razonamiento se articula perfectamente con la recuperación de una ética del consenso y de la responsabilidad como fundamento del orden democrático. Por una parte, es un intento por desmontar todo el mecanismo de la "profecía autocumplida" en la cual se fundan las ideologías de la época. La representación de la crisis como crisis estructural contribuía de hecho a desencadenarla (el famoso dilema "socialismo o fascismo" pertenece nítidamente a esta categoría) y las teorías encontraban en sí mismas su propio criterio de validación. La percepción de que determinaciones estructurales guiaban el comportamiento de los actores (que remite a las técnicas del profeta precisamente, quien siempre actúa por necesidad objetiva) debilitó el sentido de la responsabilidad, que sólo es posible entre actores que asumen su propia capacidad de deliberar y de escoger cursos de acción que no están predeterminados. La hipótesis de una "crisis de consenso", aparte de su validez empírica, tiene pues una moraleja: apunta claramente a desmontar la circularidad de los razonamientos ideológicos y reclama un reconocimiento de responsabilidades generalmente ocultas tras el velo de las convicciones. Por otra parte, es una tesis que afirma la importancia estratégica del consenso en la fundación de todo orden democrático. Pero con esta importante consecuencia: el quiebre democrático no resulta de la erosión de un proyecto común, sino de la disposición a cooperar y llegar a acuerdos, motivada por efectos tanto ideológicos como institucionales. Esta concepción formal del consenso que revisamos más arriba reaparece nítidamente: no es el desacuerdo acerca del contenido (proyecto), sino sobre la forma (pacto) lo que estuvo tras el colapso democrático.

La recuperación de la democracia será entendida, por consiguiente, como superación del proceso de radicalización y de polarización política. En el primer caso, se trata de la "revalorización de la democracia" cuya forma comentamos anteriormente; en el segundo, de la recomposición de sistema político entendido como un sistema de actores recíprocamente orientados hacia la cooperación. Las operaciones fundamentales que conducen a la formación de sistema político es lo que técnicamente se llama el "proceso de transición democrático".⁷ Dicha noción se constituye propiamente tras el declive de las "protestas nacionales" del período 1983-1985, definidas por M. A. Garretón como "movilizaciones sociales sin estrategia de transición". El retorno a la democracia se identifica entonces con la recomposición de sistema político antes que con el estímulo a la movilización social que, por regla general, no conmueve a los regímenes autoritarios. Es la resolución de la crisis política, sobre la cual está verdaderamente fundado el régimen autoritario, la que abre oportunidades para la democracia. La crisis económica ("ajuste estructural") en la cual descansa la movilización social juega un rol secundario, y en ocasiones contraproducente (v.gr. algunos autores consideran que Pinochet sucumbió debido a su propio éxito en el plano de la modernización económica).⁸ La prioridad que se otorga a la formación de sistema político será, pues, la característica principal del proceso de redemocratización chileno. La identificación entre democracia y sistema político llega aquí a su máxima expresión.

La recomposición de sistema político sigue las pautas definidas anteriormente. Se trata: (a) de restablecer un consenso en torno a las reglas del juego democrático, cuya forma institucional tiende a limitar el exceso de competencia y bloquear las posibilidades de polarización (en particular, la formación de gobiernos con minoría parlamentaria); y (b) de restablecer la concertación política, vale decir, la flexibilidad del sistema de partidos que reinaugura la práctica de los gobiernos de coalición interrumpida durante varias décadas. Como es sabido, el proceso político chileno siguió precisamente este curso: la democracia chilena se identifica con este éxito.

LA IDEOLOGÍA POPULISTA

La formación de sistema político no fue un proceso fácil ni incontestado. En particular, tuvo que abrirse paso en medio de una experiencia política radicalmente diferente, que llamaremos técnicamente "populista", por sus semejanzas con el modelo del populismo ruso. En este apartado describiremos la

formación de una ideología populista cuyas tensiones con la ideología democrática que recién comentamos saldrán fácilmente a la luz, y luego haremos algunas indicaciones sobre su trayectoria política durante la vigencia del régimen autoritario, sobre todo sobre la separación creciente entre uno y otro curso de acción en ese mismo período. Debemos anotar enseguida que la contradicción que existe entre "populismo" y "democracia" nada tiene que ver con las tensiones entre sistema político y actores sociales: la ideología populista reclama para sí misma la interpretación de una experiencia específicamente popular por contraposición a la experiencia de las elites. Pero la contestación popular del sistema político no arrastra de ninguna manera a todos los actores sociales. Dicho esquemáticamente, la ideología populista encuentra soportes sociales entre los llamados "pobladores", vale decir, en la experiencia de organización y movilización de las barriadas pobres, pero el sindicalismo obrero permanece, por el contrario, íntimamente asociado a la lógica de recomposición de sistema político. La ideología populista se forma, por lo tanto, al interior del "sistema político" (en el sentido general del término) e, inversamente, la ideología democrática no es siempre una ideología de políticos profesionales sin vinculaciones ni incidencia en la formación de actores sociales.

El núcleo de la convicción populista es éste: el mundo popular es el locus, e incluso el portador, de un proyecto hegemónico. En la formación del concepto de "pueblo" como sujeto hegemónico concurren aquellas orientaciones que, como se mencionó anteriormente, intentan superar la forma leninista del proyecto revolucionario. El giro específicamente populista de esta superación, que trasciende el concepto gramsciano de "hegemonía" o las teorías de los movimientos sociales, es materia tal vez de contexto histórico. Dos son los elementos centrales en este punto: en primer lugar, la desaparición --por obra de la represión y clausura autoritaria-- de las elites políticas, ya sea en su forma institucional (sistema político) o revolucionaria (vanguardia), lo que motiva un vigoroso proceso de "ida al pueblo" que se tematiza cada vez más como una contestación contra la función dirigente y contra la constitución de un proyecto revolucionario "desde arriba"; en segundo lugar, la desaparición concomitante de actores sociales, y específicamente del movimiento obrero: la experiencia populista se construye fuera del mundo obrero, en un contexto de desproletarización y apatía sindical que se mantendrá a lo largo de la década y en un marco de exclusión popular que no se había visto antes. Los mecanismos de socialización política habituales --partido y clase: fundamentos del leninismo a fin de cuentas-- se desmoronaron de un modo dramático. El escenario autoritario favorecía, por el contrario, una reconceptualización de la política definida como articulación entre intelectuales (agrupados en lo sustancial en torno a ONGs, es decir, fuera del sistema institucional: universidades y partidos) y pueblo (definidos genéricamente como "pobladores", vale decir, como actores alojados fuera de todo sistema de regulación y en particular fuera de la economía industrial). Esta doble combinación --represión política y exclusión económica-- es el telón de fondo de la experiencia populista.

La "revalorización de lo popular" cumplirá aquí un papel semejante a la "revalorización de la democracia" del caso anterior. Esta revalorización debe entenderse en un sentido convencional como rescate del potencial de historicidad de los excluidos. Los elementos centrales serán, por lo tanto: (a) una teoría de la exclusión que remite formalmente al esquema de la teoría de la dependencia (al postulado del carácter parcial y excluyente de los procesos de modernización capitalista), pero que, sobre todo, adquiere la dimensión de una experiencia vivida: los análisis de la exclusión pierden, por consiguiente, la referencia analítica --la dependencia como mecanismo estructural que produce pauperización-- y adquieren una coloración fenomenológica que se expresa, por ejemplo, en el apogeo de las "historias de vida" y el esfuerzo por reconstruir la experiencia interna de la pobreza y de la dominación, generalmente con una intención pedagógica e ilustrativa; (b) el recurso a una teoría del sujeto definido como sujeto histórico: en este punto se produce el mismo desplazamiento desde el plano de la estructura --teoría de las clases-- hacia el plano de la acción --teoría del movimiento social--. Aquí es preciso solamente tomar el siguiente resguardo: la noción de "movimiento social" no remite a una teoría de la acción, sino más bien a una teoría del sujeto. El movimiento social no designa cualquier clase de acción históricamente posible, sino la producción misma de un sujeto histórico, vale decir, de un actor que se aloja fuera del sistema. La conexión entre exclusión popular y movimiento social es lo propio del esquema teórico del populismo: éste se construye, por un lado, contra la sociología de la pobreza, que vincula usualmente la exclusión con la desintegración, la apatía y el conformismo popular, vale decir, con la destrucción de toda capacidad de acción histórica; y, por otro lado, contra las teorías que depositan el principio de historicidad en las elites, particularmente en el Estado o, en su defecto, en los intelectuales o cualquier otro grupo definido por su disponibilidad de recursos de poder.⁹ La vinculación entre exclusión social y

proyecto histórico será entonces la hipótesis central del populismo: es esto lo que se condensa en el concepto de "pueblo". El pueblo no designa al mundo de los excluidos en general, sino a aquel segmento históricamente movilizad; inversamente, la pura formulación de un proyecto histórico no basta: la experiencia de la exclusión es ineludible y es por esto que los intelectuales se reconocen como parte del pueblo a través de técnicas específicas de conversión y de resocialización, que genéricamente se conocen como "ida al pueblo" (v.gr. la exigencia de compartir, acompañar o comprometerse con la suerte de los excluidos).

Los componentes de esta ideología populista pueden ser objeto de un breve inventario. Una de sus expresiones más relevantes es lo que se ha llamado "economía popular", por ejemplo en los escritos de L. Razeto. La economía popular designa el conjunto de experiencias de organización solidaria destinadas a resolver necesidades económicas (talleres laborales, grupos de autoayuda, comprando juntos, huertos familiares, ollas comunes, grupos de ahorro, etc.). La economía popular se distingue de las estrategias de sobrevivencia, así como de las redes informales de asistencia mutua, por una doble referencia a la organización y a un proyecto. Tras la economía popular se encontraría, en efecto, una nueva forma de organización popular que Razeto define de esta manera: "se ha ido buscando a través de la experimentación de formas solidarias un modo nuevo de organización popular, en que se articulen mejor lo económico, lo social y lo político, en que haya relaciones internas democráticas y nunca autoritarias, donde se avance hacia la autonomía y se eviten todas las instrumentalizaciones, donde haya más proximidad entre dirigentes y bases, mucha participación, y donde los problemas cotidianos y las acciones por el cambio social se integren en una sola programación de actividades".¹⁰ Este modelo de organización se opone al modelo reivindicativo del sindicalismo clásico, lo que remite a un rasgo típico de esta revalorización de lo popular: la sospecha frente al carácter democrático de la organización obrera y, sobre todo, acerca de su eficacia transformadora (sospecha que suele estar, por lo demás, perfectamente fundada). La economía popular se define, por otra parte, como una nueva forma de racionalidad económica. Razeto recurre al concepto de "mercado democrático" para designar un mercado "en que el poder se encuentre altamente distribuido entre todos los sujetos de actividad económica, repartido entre una infinidad de actores sociales, desconcentrado y descentralizado" (Razeto 1986, p. 129). Buena parte de los temas clásicos del populismo económico están contenidos en este concepto: sobre todo la lucha contra la concentración capitalista del poder económico (el enfrentamiento entre el taller autogestionado y la multinacional); la resistencia frente al trabajo asalariado en nombre del control sobre los propios medios de producción e, incluso, la pérdida de toda referencia al Estado como agente de intervención económica. La economía popular no llega a ser, sin embargo, la ideología de pequeños productores enfrentados al gran capital, en buena medida porque dicha economía no descansa realmente en unidades productivas, sino en unidades de consumo: el tema fundamental será, por consiguiente, el tema de la participación, de la organización en torno a derechos, de la satisfacción de necesidades y de la asociación solidaria. Más importante aún: la economía popular no se funda en una experiencia de explotación o de proletarianización como en los populismos clásicos, sino en una experiencia de exclusión. Es esto lo que permite imaginar una economía que se sustrae enteramente a las exigencias de racionalización formal y de institucionalización de las relaciones sociales. La economía popular se constituye por agregación de experiencias de organización fundadas en relaciones cara-a-cara, en la intervención colectiva sobre el proceso de toma de decisiones y en la administración de acuerdo a necesidades personalizadas. Los inconvenientes de la institucionalización quedan fuera de su horizonte, en particular el problema del desarrollo (de hecho, la economía popular está vinculada a teorías del anti-desarrollo) y de la regulación del espacio económico. La recuperación del concepto de "competencia perfecta" para designar un mercado auténticamente democrático es el corolario de esta concepción: para Razeto, se trata de "construir en la práctica los supuestos de la teoría (de la competencia perfecta)" que, aunque permanece como concepto-límite, orienta y posibilita un proceso de democratización de la vida económica desde el mundo popular.

El concepto de economía popular puede intercambiarse con cualquier otra designación de lo popular. En el plano de la política, comprende la producción de un sujeto completamente al margen del sistema institucional definido, por lo tanto, por la eliminación de relaciones de poder. Esto se ha llamado usualmente "movimientismo" (en la literatura brasileña, por ejemplo), vale decir, la producción de actores fuera del sistema político, lo que rompe también en este caso con la lógica de la acción obrera constituida por alguna forma de vinculación entre sindicato y partido. En otras ocasiones se ha formulado como desarrollo de las capacidades locales de autogobierno, que se obtiene por agregación de

organizaciones populares de base y la conformación de un espacio territorialmente definido de autoadministración popular (experiencias como Villa El Salvador en Perú o Villa Francia en Chile apuntan en esta dirección: la densidad del tejido organizacional no ha sido nunca suficiente, sin embargo, para dar consistencia a este proyecto). En todos los casos, la democratización política se piensa fuera de los requerimientos de institucionalización según el modelo de la "democracia directa", que se opone no sólo a los regímenes autoritarios, sino que apunta también a la superación de la "democracia representativa". En el plano de la religión se encuentran los mismos elementos. La "teología de la liberación", cuyo papel en la formación de la ideología populista es decisivo, elabora la categoría de lo "popular" de la misma manera: a través de una ética de la liberación cuyo horizonte es la anticipación del Reino de Dios en el mundo. La recuperación del concepto de "Reino de Dios" es equivalente a la de "democracia directa" o "competencia perfecta": se trata de conceptos-límite que permiten fundar al sujeto fuera del sistema, en este caso a través de la oposición entre "comunidades eclesiales de base" e Iglesia, definidas como portadoras de una ética de la liberación y una ética de la dominación, respectivamente. También existe una "educación popular" y una "comunicación popular" que remiten a lo mismo. Por una parte, a la desarticulación de las relaciones de dominio, jerarquía y poder en el proceso de socialización cuyo concepto-límite es el modelo del "autoaprendizaje", lo que se expresa en la voluntad de constituir al sujeto fuera de la escuela y de la familia, concebidas generalmente como mecanismos de socialización verticales o autoritarios. Por otra parte, la "comunicación popular" se define por oposición a la cultura de masas y se expresa en el ideal de una "comunidad lingüística" regulada por el consenso discursivo en un sentido, sin embargo, que propende a la formación de identidad más que al acuerdo que presupone diferenciación previa. La crítica de la cultura de masas debe entenderse como una superación de las relaciones de poder en la transmisión y circulación de mensajes (v.gr. la distancia entre emisor y receptor), así como un rechazo a la formación no discursiva del sujeto. Recuperar el control sobre el uso de la palabra significa estas dos cosas simultáneamente. Pero también el uso de la palabra se da bajo una forma especial: el estilo discursivo del populismo es "dejar hablar" y "no contradecir". La palabra remite a la espontaneidad del sujeto que se llama "testimonio" y rehuye las durezas de la objetivación, en particular la asertividad, la abstracción o el argumento formalmente correcto que figuran como recursos discursivos del sistema.

La tematización de lo popular alcanza otras esferas tal vez menos conocidas. Puede mencionarse, por ejemplo, el intento de G. Salazar por construir una "ciencia popular" que se contrapone a una "ciencia oficial".¹¹ Esta es la formulación de Salazar: "el 'bajo pueblo' ha acumulado frustración sobre frustración, hambre de humanización, rabia historicista, y necesidad de contar con una ciencia social propia . . . El movimiento popular necesita una ciencia que ilumine la celdilla estructural, la ruptura del encierro y el camino hacia las 'grandes alamedas'. Que ordene lógica y eficientemente la rabia popular. Que planifique la longitudinal de los instintos. Que se centre, de un lado, en la valorización categorial y metodológica de las particularidades (o diversidades o fragmentaciones); y de otro, en la valorización de las rupturas, proyecciones y procesos. Una ciencia de la dinámica social de humanización, no sólo de las normas de funcionamiento de un sistema establecido de equilibrio social. Es decir, que trabaje sobre el sendero prohibido que, centrado en P lleva hasta P-G". (Salazar 1990, pp. 49-50). La contraposición convencional entre análisis histórico y análisis de sistema no es todo: el populismo histórico centra su análisis en determinados actores, aquellos que se mueven al margen o contra el sistema (los llamados "reventones historicistas" del "bajo pueblo"). La presencia de historicidad en el mundo popular requiere, sin embargo, de una mirada particular, vale decir, de una epistemología cuyos puntos centrales son el análisis de larga duración, una noción historicista de totalidad o "totalidad concreta", una definición también historicista del sujeto y una actitud científica que no se limite a la observación pura y aséptica, sino que trabaje "en la propia carne popular y en el interior de un apretado proceso social en marcha" y que esté dispuesta a pagar el precio de la ilegitimidad y sospecha oficial. El problema epistemológico se reduce a esto: cómo constituir al "bajo pueblo" en portador de un proyecto hegemónico, cuando lo que se observa son acciones fragmentarias y discontinuas, expresiones particularistas sin articulación ni densidad histórica. La epistemología populista de Salazar es un llamado a ver (o tal vez a creer) lo que aparentemente no se muestra: el trabajo en el sentido hegeliano del sujeto histórico sobre el material de acciones particulares, cuya continuidad, articulación y destino debe elaborarse desde una epistemología científica, vale decir, desde la mirada del intelectual comprometido. La ciencia popular está llamada, por lo tanto, a realizar el paso de P a G (o más exactamente a P-G, la totalización que conserva no obstante al sujeto concreto), vale decir, la pretensión hegemónica que se adjudica al mundo popular.

En una variante opuesta a la ciencia popular se encuentra el "arte popular" como esfera de tematización de una ideología populista. También aquí se trata de recuperar el uso de las facultades expresivas del mundo popular y la producción de un sujeto con capacidad de crear: se opone, por lo tanto, a la industria de consumo cultural y, en general, al aparato expresivo de la cultura de masas (la moda, la televisión, la publicidad, la música ligera). La influencia populista en el dominio del arte adolece en general de exceso discursivo; usualmente la expresión está subordinada al mensaje (por ejemplo, en la música importa sobremanera la letra, aunque la generación populista de los ochenta vivió mucho menos de la poesía que la generación revolucionaria del período anterior, tal vez por el impacto de la televisión entre uno y otro momento). El arte populista tuvo de todas maneras alguna expansión. Tal vez es el único lugar donde se recuperan tradiciones efectivamente populares (artesanía rural y ciertos usos del folklore tradicional). Al mismo tiempo, la incorporación de ciertos elementos de inspiración claramente populista (la moda artesanal o la música andina, por ejemplo) se expandieron más allá de los círculos organizados.¹² Otras regiones de la vida social fueron menos tematizadas por la ideología populista. En particular, no existe un arquetipo equivalente de "familia popular": el carácter fuertemente ideológico del populismo, centrado en la organización y el proyecto, conduce a ignorar la familia y relevar, en cambio, los procesos de socialización secundaria. Tampoco existe propiamente una "sexualidad popular", un modo alternativo de concebir el sexo. En ambos casos, el populismo se contenta con una moral humanista relativamente convencional y tiende a rechazar los valores emancipatorios del liberalismo europeo.¹³

Dos problemas adicionales pueden mencionarse finalmente a propósito de la ideología populista. En primer lugar, su distancia respecto de la cultura popular realmente existente. El populismo practica, en efecto, el método de la *tabula rasa* en este campo: la economía popular nada tiene que ver con las estrategias de sobrevivencia y la demanda por protección social que prevalece usualmente entre los pobres; la movilización política se opone frontalmente a las modalidades tradicionales (específicamente, a la movilización de tipo nacional-populista); la movilización religiosa choca con igual ímpetu contra la tradición mariana de las masas populares; la educación popular contra la inmersión popular en la cultura de masas, y así por delante. Esta discontinuidad marca los límites de la expansión populista en el propio mundo popular.¹⁴ Dejaremos esta contradicción para un análisis ulterior. Para nuestro propósito, interesa la contradicción existente entre populismo y sistema político. El populismo es un proyecto que se valida finalmente en la política, vale decir, que realiza sus expectativas en el mundo histórico. El populismo como experiencia de movilización política es lo que marca el escenario de las luchas populares de los ochenta: esto es lo que veremos a continuación.

LA EXPERIENCIA POPULISTA

El origen histórico de la experiencia populista se sitúa naturalmente en el marco del régimen autoritario chileno. La especificidad de este régimen resulta de la combinación de políticas de "ajuste estructural" que provocaron pauperización (desasalarización del trabajo, desempleo de dos dígitos por un período prolongado, reducción de las políticas estatales de asistencia social) y autoritarismo político que bloqueó todos los canales de organización colectiva. El ajuste estructural chileno se produjo en un marco de atomización social: por un lado, se reducen drásticamente todas las políticas de intervención estatal en los medios populares (exceptuando una política de asistencia social minimalista) y, por otro, se clausura la vida democrática y con ello la conexión entre organización social y sistema político, específicamente la posibilidad de representar demandas sociales en el sistema institucional. La pobreza se expande sin posibilidades de acceso a recursos organizativos de ninguna especie: ausencia de sistema político, parálisis de la organización social y distancia respecto del Estado. La movilización popular estará marcada por esta pérdida de referencia al Estado, que deja de acoger demandas y de proveer protección social. Pero esto no es lo más importante. También se aleja del modelo obrero de movilización, cuyos elementos centrales fueron la disposición de trabajo asalariado, la expansión de la organización sindical y la representación de intereses a través del sistema político. Las estrategias de movilización popular se definirán sobre todo por esta pérdida de referencia a la organización reivindicativa (que se sustituye por la organización solidaria) y al sistema político (que se sustituye por el contacto directo entre partido y organización, o sea, por lo que se llama comúnmente "ida al pueblo").

Esta estructura general de la experiencia populista reconoce, sin embargo, distintas lógicas de acción que conviene distinguir. La primera es la lógica de la *defensa comunitaria*, cuyo sentido general es la

defensa de las condiciones materiales y morales de vida de una comunidad amenazada por la crisis. La defensa comunitaria opera todavía con una teoría que conecta exclusión y desintegración social: es un esfuerzo por vencer los efectos anómicos de la pobreza y evitar el colapso de las personas y de la comunidad. "Le militantisme communautaire en appelle à des réseaux de solidarité plus larges, ceux du quartier et de la paroisse. Parce que les femmes sont l'élément le plus stable de la famille et parce qu'elles s'identifient à la défense de la vie, elles sont au cœur des organisations et de l'action communautaires. Elles prennent en charge la 'olla común', la soupe populaire, elles organisent des consultations de santé, des centres pour les enfants, en s'appuyant sur des organisations mises en place à la fin des années soixante ou bien créées récemment autour de la paroisse. Il arrive aussi que ces activités soient soutenues par les travailleurs sociaux qui adhèrent à des modèles beaucoup plus 'militants' que 'professionnels': il s'agit plus d'aider une auto-organisation, notamment par les groupes de femmes, que de distribuer des ressources publiques quasiment inexistantes".¹⁵ La dimensión económica de la solidaridad se mezcla con una dimensión específicamente moral: la defensa del derecho a la vida que cobra especial relieve en el plano de los derechos humanos y la denuncia de la represión política. La defensa comunitaria está rodeada de algunos motivos populistas, particularmente todos aquellos que destacan la "fuerza moral de los pobres". Pero lo propio de la defensa comunitaria consiste en que no elabora ninguna pretensión hegemónica, incluso en el terreno moral, desde el mundo de los pobres. La ética de la solidaridad no es todavía una ética de la liberación, ni la acción comunitaria se identifica con la movilización popular. En este sentido, la figura más representativa serán los grupos de mujeres, doblemente identificadas con la defensa de la sobrevivencia popular y de los derechos humanos. Asimismo, el liderazgo de la acción comunitaria recae sobre la Iglesia Católica (sobre todo el cardenal Silva Henríquez), y en las poblaciones sobre los curas párrocos (típicamente P. Dubois en La Victoria), que deben distinguirse claramente de los curas que formarán "comunidades eclesiales de base" (generalmente curas sin parroquia que han "ido al pueblo" y que no operan como líderes comunitarios, sino como líderes populistas).

La lógica de la defensa comunitaria debe distinguirse, por lo tanto, de la lógica del *protagonismo popular*, que define propiamente la experiencia populista como experiencia de movilización. Dos cosas deben ser tomadas en cuenta en este punto. En primer lugar, la experiencia de la crisis no es vivida solamente como desintegración, sino también como exclusión: el sentimiento de exclusión supone, en efecto, movilización previa que choca contra obstáculos considerados infranqueables. Este efecto de exclusión se expresa doblemente: (a) como contradicción entre una movilización política previa que enfrenta la clausura autoritaria, y (b) como contradicción entre una movilización educativa, que continuó ampliándose durante todo el período y cuya nota característica fue la expansión de la enseñanza secundaria, que choca, a su turno, con las condiciones de crisis económica que imperaron en el decenio. La exclusión no es un sentimiento localizado únicamente en la capa de intelectuales que "va al pueblo", sino que penetra también en cierta franja de los "pobladores", justamente aquellos que provienen de procesos frustrados de movilización social. La experiencia previa de organización política y la experiencia actual de movilidad educativa estarán en el origen de la formación de una estructura de militantes de base que tematiza la crisis como exclusión, antes que desintegración, y como movilización antes que como defensa comunitaria. Sobre las características de esta estructura de militantes se han mencionado efectivamente: (a) la importancia de la socialización política previa, sobre todo aquella de origen familiar o "vecinal", dada la dificultad que enfrentan los partidos para proveerla directamente; y (b) la importancia que adquieren en la organización popular los jóvenes, especialmente aquellos con alta escolaridad relativa y sin déficit de socialización primaria. En el primer caso se ha hecho notar la prevalencia de la reproducción familiar de la actividad política, muchas veces reforzada por experiencias de represión directa.¹⁶ También se ha mostrado que la densidad de actividad política es siempre mayor en aquellos lugares donde hubo movilizaciones activas en el pasado, como en el caso paradigmático de La Victoria.¹⁷ En el segundo caso, debe mencionarse el protagonismo de los jóvenes en la movilización política, que reemplaza el de las mujeres vinculadas más bien a una lógica de defensa comunitaria, y sobre todo la pauta de reclutamiento de estos jóvenes, casi siempre provenientes de los espacios menos deteriorados de las poblaciones.

Pero todos estos procesos de movilización oculta se actualizan con las "protestas" nacionales del período 1983-85. Las "protestas" reconvierten la lógica de la defensa comunitaria en una lógica de movilización política. La interpretación de las "protestas" ha sido, justamente por ello, motivo de controversia. La versión más corriente vincula las "protestas" con una crisis económica de proporciones

catastróficas que resintió seriamente las expectativas de integración de los sectores medios, e incluso obreros (sorprendidos masivamente como deudores de créditos hipotecarios y de consumo) y expandió la tasa de desempleo, que alcanzó de lleno a los jefes de hogares populares, y de un modo generalizado a los jóvenes. Pero las "protestas" no se dieron sólo en un marco de crisis, sino también de desorganización de la acción colectiva. Este déficit se manifestó, por un lado, en la ausencia de movilización obrera en las fábricas, que frustró todas las tentativas de huelga general; y, por otro, en la ausencia de sistema político capaz de conseguir ventajas institucionales a partir del descontento general, en particular, la incapacidad de inaugurar un proceso de "transición democrática". Esta versión ha sido usualmente rebatida desde el ángulo populista. En este caso, se subraya la centralidad de la organización popular y el protagonismo de los "pobladores" en el origen y despliegue de las protestas. En la versión de G. Salazar, por ejemplo, "la protesta poblacional combinó elementos lúdicos con expresiones profundas de historicismo social, y solidaridad comunitaria con actitudes de 'guerra de baja intensidad'." (Salazar 1990, pp. 383 y ss.).¹⁸ Las protestas dejarían al descubierto el potencial de historicidad del mundo de los excluidos (que de ninguna manera puede ser tematizado como bolsones de desintegración social), y recíprocamente la impotencia política de los partidos y del sindicalismo tradicionales. La tesis del "protagonismo popular" se fundamentaba, por lo tanto: (a) en la concentración de la capacidad de acción colectiva en las poblaciones, y (b) en la preponderancia de las organizaciones de base por encima de los partidos y del propio sindicalismo. Las "protestas" dieron algún asidero a esta pretensión protagónica: fueron movilizaciones barriales cuyo epicentro estuvo efectivamente en el cinturón de pobreza de la capital. Asimismo, la actividad de los partidos se localizaba casi exclusivamente en las poblaciones y se alimentaba de la movilización popular más que obrera.¹⁹ La centralidad de los "pobladores" y de la organización popular en la movilización política pareció entonces fuera de dudas. La elaboración de dicha centralidad como pretensión hegemónica fue el rasgo característico del argumento populista.

La lógica del protagonismo popular, sin embargo, se desvaneció rápidamente. Este deterioro introduce una tercera lógica de acción: la del *radicalismo político*. El origen de la radicalización política de los "pobladores" debe situarse en el momento de declive de las "protestas": la violencia política aparece después y no durante las protestas. La violencia popular en el período de las protestas fue "violencia difusa" (delictual o semidelictual: por ejemplo, asaltos a establecimientos comerciales)²⁰ o "violencia comunitaria", vale decir, defensa o control de un territorio frente a la intromisión de la policía (por ejemplo, barricadas cuyo carácter defensivo puede notarse en la falta de agresiones con armas de fuego frente a la represión policial). La aparición de focos de violencia política (FPMR, MIR-Rebelde, Lautaro), en cambio, corresponde netamente al período 1986-89. Esta violencia debe ser comprendida, por consiguiente, en un marco de descomposición de la movilización social y de recomposición del sistema político. Es necesario distinguir ambos procesos. La estrategia de recomposición de sistema político es el camino que siguen los principales actores políticos tras el declive de las "protestas". Ya hemos visto su argumento: las protestas son movilizaciones sin "estrategia de transición democrática"; la eficacia del proceso de democratización depende de la reconstitución de sistema político y, por último, dicha recomposición exige estrategias de concertación que se constituyen fuera de la movilización social. Este argumento entra en contradicción evidente con la tesis del "protagonismo popular", que otorga todo el peso de la prueba a la eficacia de la movilización popular. El divorcio creciente entre actores políticos y organización popular será, por lo tanto, uno de los principales motivos del proceso de radicalización de los pobladores organizados. Son habituales en este período la crítica al distanciamiento de los partidos, que se despegan de su hábitat popular; al abandono del sindicalismo, que adhiere unánimemente a la estrategia de transición democrática y refuerza sus vínculos con los actores políticos y también a la deserción de la Iglesia Católica (en el período del Cardenal Fresno), que añade el lema de la "reconciliación nacional" a los lemas convencionales del período de Silva Henríquez, "compromiso con los pobres" y "defensa del derecho a la vida".

Pero esto no es todo. La resistencia contra la estrategia de "transición democrática" choca con limitaciones propias en la capacidad de producir una movilización popular autónoma fuera de la mediación política o sindical. Las "protestas" no lograron ser reactivadas por las propias organizaciones populares: en todo momento dependieron de convocatorias nacionales, ya sea de líderes políticos o sindicales (fue la fase activa del MDP y de la política comunista de la "rebelión popular" y del "año decisivo"). Justamente este déficit de protagonismo real aceleró el proceso de radicalización: grupos armados se sustituyeron crecientemente a una movilización social en declinación (como en el intento del

FPMR de asesinar a Pinochet en la primavera de 1986, que expresó la voluntad de realizar aquello que las "protestas" no lograron hacer). Por último, el éxito plebiscitario de 1988 transformó la violencia en "terrorismo", vale decir, en violencia despojada de toda legitimidad social y explícitamente dirigida contra el sistema político democrático (es la fase que inaugura Lautaro, cuya aparición en la escena pública fue el asesinato de un carabinero en las elecciones generales de 1989).²¹ La conexión entre violencia política y descomposición de la acción colectiva ha sido recurrente en sociología: el caso chileno la confirma plenamente. Al revés de lo que creen los militantes radicales, la violencia política no es la fase de madurez de los movimientos sociales sino, por el contrario, aparece como respuesta frente a sus limitaciones.

Todo este proceso de radicalización tiene una cara, sin embargo, que escapa a la violencia: en la fase de declive de las "protestas" se expresa en movilizaciones testimoniales como el "Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo", cuyo radicalismo debe comprenderse en la contraposición entre sistema político y derechos humanos (en particular la imposibilidad ética de sentarse a la misma mesa con aquellos que estuvieron comprometidos con el régimen militar). La elección del tema de la tortura tiene este tipo de implicación: la dictadura aparece como el mal radical y sólo puede combatírsela consecuentemente desde el punto de vista del torturado. Entre víctimas y verdugos, por lo tanto, no cabe de ningún modo la posibilidad del consenso, que es precisamente la que intentan elaborar los actores políticos.

La conexión entre radicalismo ético y violencia es un tema que se plantea en este contexto. Sobre este punto diremos solamente lo siguiente: muchos militantes accedieron a la violencia política a través de la radicalización de una ética de la liberación, sobre todo aquellos formados a partir de "comunidades cristianas de base" (el ejemplo más conocido es el de los jóvenes formados en Villa Francia). Esto es algo propio de la actitud teórica de la "teología de la liberación latinoamericana", entendida como la conexión entre una ética de la convicción y una acción política: a saber, la incapacidad de elaborar un criterio que resuelva el problema de la violencia. La formulación de una ética pura de la convicción y su conexión con la problemática del poder conducen inevitablemente a la legitimación de la violencia. En nuestro caso, todo esto pudo verificarse de un modo práctico: la estructura de las "comunidades eclesiales de base" (incluyendo a los curas que las formaron) proveyó constantemente este criterio de legitimación para la radicalización política de los jóvenes.²² El curso de este proceso es fácil de reconstruir: los jóvenes realizan la transformación de una ética de la solidaridad en una ética de la liberación precisamente al calor de la movilización política de los ochenta. Realizan prácticamente la conexión entre una ética de la convicción (solidaridad, derechos humanos) y una pretensión de dominio (derribar la dictadura, protagonismo popular): el acceso a la violencia legítima quedó abierto entonces para muchos.

El déficit de protagonismo popular no produce, sin embargo, únicamente violencia. La experiencia populista culmina, en realidad, en abstención política, por ejemplo abstención preelectoral en el período plebiscitario, y desorganización en la etapa post-plebiscitaria.²³ La pretensión protagónica sigue masivamente este curso en un doble sentido: por un lado, la retirada de los intelectuales que habían "ido al pueblo" (que salen de las organizaciones populares y se reprofesionalizan fuera de ellas, por ejemplo a través de cursos de posgrado en el extranjero); por otro, la "ida para la casa" de los militantes radicales y/o su incorporación tardía en el sistema político (por ejemplo, entrada al PS-PPD de todos los grupos que contaban con apoyo poblacional). El éxito de la estrategia plebiscitaria, la recomposición del sistema político y la fortaleza de la concertación de centro-izquierda en el gobierno marcan el fin de la experiencia populista. El protagonismo de los actores políticos desplaza definitivamente las expectativas hegemónicas que se depositaron en los "pobladores".

LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO.

La transición democrática chilena se caracteriza, como se ha dicho antes, por la reconstrucción de sistema político, vale decir, de una estructura plural de partidos orientados recíprocamente entre sí. El caso chileno, con su insistencia peculiar en la identificación entre democracia y sistema político, tiene otra singularidad: la estabilidad en la estructura de representación política que sigue el esquema aproximado de los tres tercios. Tras la clausura autoritaria, en efecto, no se advierten desplazamientos importantes en los contenidos de la representación política (exceptuando únicamente la baja del Partido Comunista). Los cambios radican más bien en la forma de la representación, que puede describirse, con

algunas variantes, con arreglo al análisis de C. Offe.²⁴ Offe examina la obsolescencia del principio de representación de clase en el marco de la democracia competitiva de partidos. "En el momento en que se organiza la participación política en forma de democracia competitiva de partidos, la propia dinámica de esta forma organizativa pervierte y obstruye la realización de intereses y la política de clase" (Offe 1982, p. 52). Las necesidades de la competencia política producen tres consecuencias principales: (a) la desradicalización de la ideología motivada doblemente por la necesidad de producir gobiernos de coalición y de atender un electorado que se organiza de acuerdo a exigencias inmediatas; (b) la desmovilización de los militantes de base, dadas las necesidades de organizar empresarialmente la actividad política en el marco de un mercado exigente y competitivo; y c) la erosión de la identidad colectiva y aparición de partidos *catch-all*, motivada por la necesidad de diversificar y extender la representación política fuera del ámbito propio del partido.

La recomposición de la estructura de partidos en nuestro caso sigue aproximadamente esta pauta. La desradicalización de los objetivos políticos ha sido ya ampliamente comentada en párrafos anteriores: la reconversión de partidos ideológicos en partidos programáticos, específicamente motivada por la necesidad de producir gobierno de coalición, y todavía la exigencia de generar mayorías parlamentarias, se advierte claramente en el caso chileno. La desmovilización de los miembros de base de los partidos es una transformación más reciente, pero notable sobre todo en la izquierda chilena. La organización de los partidos parece avanzar hacia un esquema de burocratización clásico que comprende, por un lado, la profesionalización de la política entendida como "carrera", vale decir, como actividad permanente, provista de competencias y habilidades específicas, y ejercida en el marco de organizaciones precisas dispuestas a tal propósito; y, por otro lado, la organización burocrático-empresarial de los partidos que se caracteriza por la tecnificación y centralización creciente de las decisiones.²⁵ Los partidos dejan, en estas circunstancias, de ser canales de participación y debate. Por una parte, se observan déficit en la cantidad y, sobremanera, en la calidad de la afiliación partidaria que se manifiestan, por ejemplo, en la pobreza del vínculo partidario que atestiguan los dirigentes sociales, en el funcionamiento irregular de las estructuras de base generalmente activadas por motivos electorales o en la generalización del uso de agentes electorales pagados para cumplir con las actividades de masas de los partidos. Por otra, es visible la ausencia de formación y socialización política de los militantes, la falta de promoción interna de los líderes locales y, en algunas ocasiones, la erosión de los procedimientos democráticos de toma de decisiones.²⁶

El debilitamiento de la identidad colectiva es otro elemento que conviene considerar en el desarrollo de una democracia competitiva de partidos. Los partidos pierden la referencia cultural que usualmente estuvo en el origen, especialmente entre los partidos católicos y socialistas, y eluden sistemáticamente la referencia a particularismos sociales o culturales que puedan restar audiencia electoral. Esto es notorio en la desaparición de identidades fuertes en el sistema político chileno, por ejemplo, la constitución de "partidos de ciudadanos" o la voluntad de representar a la "gente", como reza el lema de la coalición gobernante. Es particularmente notable la obsolescencia de la identidad popular u obrera en la izquierda, así como de los grandes clivajes culturales de antaño, laico-católico o liberal-conservador. La capacidad de los partidos de representar identidades culturales y de intervenir en la materia se resiente notoriamente, puesto que la heterogeneidad de sus miembros y seguidores es cada vez mayor. Esta misma heterogeneidad reduce las diferencias al interior del sistema político ("todos dicen más o menos lo mismo") y diluye incluso las fronteras de la identificación política (derecha-centro-izquierda).

Los déficit recién enunciados tienen a su turno compensaciones. La erosión de la identidad colectiva, por ejemplo, puede ser sorteada a través de los carismas electorales que resuelven, muchas veces artificialmente, las necesidades de identificación cultural. La ausencia de "partidos de masas" se supera con la publicidad, que se revela como un mecanismo de acceso a los electores tanto o más eficaz que una cohorte de militantes de base. Los déficit ideológicos, por último, se sustituyen cada vez más por técnicas de formación e intervención sobre la opinión pública. La política se organiza crecientemente en torno a estos elementos: agrupamiento en torno a líderes con imagen pública, hiperinversión en publicidad y sustitución de los ideólogos e intelectuales doctrinarios por expertos en la exploración y manejo de la opinión. Estos elementos son devastadores para la antigua organización del partido. Los líderes, por ejemplo, ya no fundan su legitimidad en el contacto directo con la gente ni en la estructura de lealtades personales pacientemente construida a través de años de actividad política: un "golpe" televisivo puede bastar.²⁷ La publicidad, a su turno, vuelve innecesarios a los aparatos y activistas. Pero

tiene también otro efecto: exacerba la distancia entre dirigentes con acceso a los medios y los militantes sumidos en el anonimato y, por lo tanto, en la insignificancia política. El exceso de visibilidad de unos y de anonimato de otros tiende a reorganizar la actividad de los militantes en torno a liderazgos ("se trabaja para alguien") e introduce imperceptiblemente la dinámica de un "partido de notables" organizado en torno a cabezas y equipos personales. El debate asimismo es drásticamente suprimido: la conquista de la opinión pública requiere de habilidades publicitarias antes que ideológicas. Dichas habilidades pertenecen a equipos profesionales y conservan el aura del secreto y de la doble intención, cuya revelación pública es contraproducente. Toda la política se construye sobre el parámetro de la identificación antes que de la opinión y el argumento.

Este despliegue del "partido competitivo" va de la mano con transformaciones del electorado. La ausencia de ideologías y la formación de partidos programáticos tiene que ver con la organización de un electorado heterogéneo articulado en torno a demandas específicas e inmediatas, no susceptibles de agregación ideológica. La institucionalización de la política se corresponde con el crecimiento de la apatía, el desinterés y la abstención electoral, vale decir, con la aparición de un electorado permanentemente insatisfecho y cada vez más distante del sistema político. La erosión de las identidades colectivas, por último, anuncia la emergencia de un electorado flotante u oscilante y un debilitamiento general de la estructura de lealtades políticas. Estas transformaciones del electorado --del cual existen algunas indicaciones ciertas para el caso chileno-- apuntan en una misma dirección: la pérdida de eficacia representativa de los partidos.

Este debilitamiento del principio de representación es una consecuencia paradójica --y tal vez no deseada-- de la prioridad que se otorga a la estabilización del sistema político. Las condiciones de dicha estabilidad son precisamente la desradicalización ideológica y la aparición de un sistema de "pluralismo moderado", basado ya sea en una ética del consenso o en la institucionalización exitosa de la competencia política. Más importante aún es la autonomización del partido respecto de los actores sociales que lo sustentan: la constitución de sistema político indica claramente el privilegio que se concede a la orientación institucional antes que social. La relación partidos-actores sociales se concibe cada vez más como una relación entre sistema y entorno: el partido, por consiguiente, se identifica con la operaciones elementales de todo sistema, procesamiento de demandas, regulación de la participación, vale decir, reducción de la variedad como requisito para la mantención y estabilidad del sistema. La función del partido ha cambiado notablemente: no se trata de estimular la participación (movilizar), sino de elaborar institucionalmente una demanda de participación autogenerada. El lema de la "autonomía de los actores sociales" tiene una doble cara: es el afán por romper la tutela de los partidos sobre los actores sociales, y en este sentido puede entenderse como emancipación política de la sociedad civil; pero, también, expresa propiamente la voluntad de constituir sistema político como espacio diferenciado respecto de aquélla. La erosión, por último, de las identidades colectivas remite al imperativo de secularización que ha sido visto como requisito de la democracia. Esto ha sido señalado antes: el sistema político se identifica con una ética formal del consenso o con reglas institucionales, vale decir, renuncia a toda pretensión de realizar valores objetivos. Esta secularización de los valores está específicamente asociada a la formación de sistema político: lo propio de toda identidad cultural es que no admite negociación ni se regula consensualmente. Es natural entonces que el ámbito de la cultura y las preguntas por el sentido permanezcan fuera de la política.

SINDICALISMO Y SISTEMA POLÍTICO

La formación de sistema político trae consigo un deterioro general de las relaciones de representación. Este deterioro es particularmente visible en las relaciones partido-sindicato y se encuentra en el origen de las tensiones existentes entre ambos actores.²⁸ La interpretación de esta tensión requiere algunas consideraciones sobre la evolución de la estructura de representación obrera. Distinguiremos sucintamente tres formas de representación. La primera corresponde al modelo del "partido de los trabajadores" en su versión ya sea comunista o laborista, cuya presencia en nuestro país está agotándose con la desaparición de las grandes tradiciones obreras (por ejemplo, la de los mineros del carbón que colapsa con la privatización y cierre previsible de las minas de Lota y Coronel) y el declive de la identidad obrera en la izquierda chilena. El "partido obrero" se caracteriza por la existencia de muy poca diferenciación entre partido y sindicato, vale decir, por la existencia de movimiento obrero propiamente tal. Esta intimidad fue estudiada por G. di Tella y A. Touraine justamente en el caso de los

mineros de Lota hace ya treinta años. En este caso, el partido no alcanza a constituirse realmente al interior del sistema político: las exigencias de representación social lo absorben por completo²⁹ y se convierte en portavoz o "correa de transmisión" de las demandas que provienen de su medio. Recíprocamente, el mundo obrero es mucho más que un sindicato: es ante todo un ethos o una identidad colectiva fundada en una experiencia de vida común que sobrepasa con mucho la realización de intereses a través de organizaciones instrumentales.³⁰ El partido obrero comprende las características cuya obsolescencia lamenta Offe: radicalismo en los objetivos en el sentido de excentricidad o distancia respecto del sistema político; participación de los miembros de base que debe entenderse como escasa profesionalización e importancia de los líderes sociales en la organización y manejo del aparato partidario; y fortaleza de la identidad colectiva.

Este modelo no es extraño en el caso chileno: la izquierda comunista y, en cierta medida, socialista, tuvo las características del partido de trabajadores. Fueron --sobre todo el Comunista-- partidos obreros por su origen, su militancia y su audiencia electoral. El peso del Partido Comunista descansó siempre en este carisma: formado en los enclaves mineros del salitre y del carbón, alcanzó una posición sólida entre los obreros industriales, pero no extendió nunca su representación mucho más allá del límite obrero (exceptuando los estudiantes de universidades públicas). También su estructura organizativa estuvo marcada por la presencia de cuadros y líderes sindicales en los puestos de influencia y dirección, o, lo que es lo mismo, por la ausencia de abogados e intelectuales en dichos puestos. Por último, su influencia electoral fue estable y relativamente limitada, en comparación con los vaivenes del Partido Socialista, lo que indicaba un electorado fuertemente identitario. Desde luego, la trayectoria del Partido Comunista no estuvo exenta de institucionalización y de diferenciación entre partido y sindicato: es el paso del "mancomunalismo" minero al sindicalismo industrial, de los líderes obreros a los dirigentes de la segunda época --generalmente maestros primarios-- y de la "época heroica" de las luchas obreras, a la participación al interior del sistema político (sobremedida en el corto período de los "frentes populares"). La proverbial moderación del Partido Comunista, sin embargo, no debe interpretarse --como se hace casi siempre-- como institucionalización al interior del sistema político. El Partido Comunista se mantuvo generalmente en la periferia de dicho sistema: no fue nunca un "partido de parlamentarios", como el Socialista, y fue el promotor de la política del "frente único" (o de la "unidad socialista-comunista" para formar gobierno propio) mucho antes de la polarización definitiva del sistema por la aparición de un centro hegemónico.³¹

El desplazamiento de este modelo clásico de representación se produjo por una paulatina distensión del lazo entre sindicato y partido. La forma más desarrollada de esta distensión es la que comienza a aparecer actualmente en el escenario chileno: primero, los partidos se desprenden de su referencia de clase y se definen cada vez más por su posición en el sistema institucional; segundo, los sindicatos se constituyen, a su vez, fuera de los partidos y se definen como asociaciones de intereses. El primer punto remite al análisis de Offe sobre la emergencia de una democracia competitiva de partidos o sobre la formación de sistema político, según se ha visto antes. La transformación del sindicalismo requiere, en cambio, algunos comentarios adicionales. La obsolescencia del partido obrero va acompañada de una heterogeneidad y complejidad creciente del mundo laboral, y de la erosión del ethos obrero de los orígenes. La unidad y densidad de la experiencia obrera se rompe progresivamente. Esto explica la emergencia del sindicalismo propiamente tal, que deja de ser la organización de una experiencia y se convierte en organización de intereses. La ruptura del ethos obrero adquiere dos formas visibles. En primer lugar, la diversificación de la representación política del mundo laboral y el pluralismo sindical, que en el caso chileno se produce a través de la penetración de la Democracia Cristiana en los sindicatos. El PDC es el prototipo de un partido no obrero con audiencia sindical: es cierto que dicha audiencia se concentra en el sindicalismo no obrero (empleados públicos y profesores inclinan la balanza a su favor en la Central Unica de Trabajadores), pero su penetración propiamente obrera (cobre, acero, petróleo) está fuera de dudas. En segundo lugar, la organización puramente sindical del mundo del trabajo avanza un trecho más con lo que actualmente se llama "autonomía sindical", vale decir, la constitución del sindicalismo fuera de la intervención de los partidos. Esta autonomía no descansa solamente en la distancia creciente entre sindicalismo y sistema político, sino sobre todo en el surgimiento de un sindicalismo de masas: ocurre que los trabajadores se identifican cada vez menos con su experiencia obrera --lo que es especialmente notable entre los jóvenes que intentan huir masivamente de un destino obrero-- y se organizan cada vez más con arreglo a intereses específicos e inmediatos. El surgimiento de una masa laboral permanentemente insatisfecha, dispuesta a movilizaciones muchas veces radicales en

torno a objetivos materiales, pero ampliamente despolitizada, es lo propio del sindicalismo de masas. La autonomía sindical, entendida como la clausura partidaria del espacio sindical y la neutralización política de los intereses obreros, se explica en este horizonte de despolitización. Los dirigentes se adaptan a esta exigencia fundamental: los intereses de los trabajadores no tienen color político, los partidos deben mantenerse fuera de los sindicatos, la legitimidad de un líder sindical reposa casi enteramente en su eficacia instrumental, en su habilidad para favorecer y realizar la demanda de los trabajadores. Pluralismo y autonomía sindical son dos momentos consecutivos de esta pérdida de identidad obrera: primero, del desaparecimiento definitivo del partido de los trabajadores, vale decir, de una identidad política común; segundo, de la distancia creciente respecto de cualquier mediación política.

La diferenciación partido-sindicato conduce, por una parte, entonces, a la formación de sistema político (y a la superación del "partido obrero"); y, por otra, a la formación de sindicalismo (y a la superación del "movimiento obrero"). Esta relación entre sistema político y sindicalismo se realiza naturalmente a través de partidos representativos, pero en un contexto de diversificación y exterioridad creciente. Los lazos de representación pierden la unidad, intimidad y complicidad de antaño. Observemos: (a) que se trata de un movimiento de diferenciación recíproca: partidos y sindicatos se exigen mutuamente autonomía relativa; (b) que la mediación política de los intereses sindicales adquiere un carácter más instrumental que identitario: los partidos son juzgados por su eficacia representativa; y (c) por lo tanto, que no existe --masivamente por lo menos-- la demanda por retornar al antiguo modelo de representación del "partido de los trabajadores". La nostalgia del "partido obrero" es apenas visible: el pluralismo y la autonomía sindical son realidades incuestionables, como lo es la voluntad de reponer la demanda obrera al interior del sistema político, antes que situarla en su periferia. Las tensiones de este modelo de representación provienen, pues, menos de la forma que asume que del contenido: concretamente, de los límites que se presentan (que fueron mencionados en el punto anterior) para restaurar el "compromiso de clases".

Este debilitamiento de la estructura de representación puede abrir, sin embargo, brechas más profundas en la relación partido-sindicato. Se trata sobre todo de la emergencia de lo que se ha llamado "neocorporativismo" en la literatura europea: éste consiste en prescindir de los mecanismos de representación partidaria y realizar funcionalmente los intereses de los trabajadores, en particular al interior de la empresa. Es la fase terminal de este proceso de distensión de la relación partido-sindicato. El caso chileno no cabe en esta denominación: la autonomización de los sindicatos es un proceso muy reciente y la referencia partidaria es todavía masiva (todos los dirigentes pertenecen a un partido político y todas las elecciones sindicales se realizan bajo identificaciones partidarias: lo que se ha deteriorado es la calidad y profundidad de esa adscripción, pero no la adscripción misma). Nuestro caso corresponde todavía a la fase de salida del "partido de los trabajadores" y está marcada por el desplazamiento de la "izquierda obrera" (en particular del Partido Comunista). La estrategia neocorporativa admite, con todo, algunos comentarios. Su estructura de plausibilidad descansa en dos procesos concomitantes: por una parte, en la despolitización creciente del mundo laboral y la erosión de los partidos; y, por otra, en el aumento prodigioso del poder empresarial que se produce en un marco de deterioro de las políticas de intervención estatal. ¿Abre esto una puerta para la realización del compromiso de clase al interior de la empresa? El comportamiento empresarial sigue vinculado --según todas las señas-- al período fundacional del régimen pasado: empresas sin sindicatos y una economía basada en la disciplina monetaria y fiscal. No obstante, la probabilidad de que emerjan estrategias de corporativización no debe descartarse: algunos empresarios están en condiciones de financiar no sólo alzas de salarios y mejoramientos en las condiciones de trabajo, sino también de proveer seguridad social para sus trabajadores permanentes (que incluye acceso a la vivienda, educación, salud y previsión en el sistema privado o incluso participación en las utilidades).³² Por lo demás, es notable que el desplazamiento del discurso populista fuera del sistema político haya sido recogido precisamente por empresarios (F. J. Errázuriz en Chile o su símil boliviano, el empresario cervecero Max Fernández), como antes era recogido por militares. Es cierto que se trata de empresarios disidentes, pero que --como los militares populistas de antaño-- recogen, aunque sea parcialmente, los déficit de representación política existentes.³³

NOTAS

1. Especialmente en los escritos de Tomás Moulian, por ejemplo, "Crítica a la crítica marxista de las democracias burguesas", en *América Latina 80: democracia y movimiento popular* (Lima: DESCO, 1981).
2. Especialmente el importante libro de Norbert Lechner, *Los patios interiores de la democracia: subjetividad y política*, 2ª ed. (Santiago: Fondo de Cultura Económica, 1990). También Angel Flisflish, *La política como compromiso democrático* (Santiago: Flacso, 1987).
3. Esta neutralización es interpretada muchas veces siguiendo el sesgo liberal del propio Weber: se postula entonces la eliminación de las éticas de la convicción del espacio público *tout court*, vale decir, la privatización de la pregunta por el sentido, cuyo ámbito legítimo de expresión radicaría en el arte y en la religión privada.
4. La evacuación del "compromiso de clases" como tarea principal del sistema político será la consecuencia de esta afirmación. Más adelante se retomará este punto.
5. Esta tesis fue formulada por Arturo Valenzuela en *The Breakdown of Democratic Regimes. Chile* (The Johns Hopkins Press, 1978). Existe traducción en castellano, *El quiebre de la democracia en Chile* (Santiago: Flacso, sin fecha). En un sentido similar deben mencionarse los trabajos de Tomás Moulian, especialmente "Violencia, gradualismo y reformas en el desarrollo político chileno" y "Tensiones y crisis política: análisis de la década del sesenta", en Aldunate, Flisflish, Moulian, *Estudios sobre sistemas de partidos en Chile* (Santiago: Flacso, 1985).
6. Este análisis ha tenido una enorme importancia en la valoración que ha hecho la propia democracia-cristiana de su rol histórico en la crisis del régimen democrático: la versión inicial, que culpaba salomónicamente a los extremos, se revierte sobre su propia capacidad de actuar como "centro" articulador de un sistema político. El abandono del "camino propio" y la apertura hacia una concertación de "centro-izquierda" ha sido su principal consecuencia.
7. En este punto cabe destacar los trabajos de Manuel Antonio Garretón, especialmente *El proceso político chileno* (Santiago: Flacso, 1983), y *Reconstruir la política: transición y consolidación democrática en Chile* (Santiago: Editorial Andante, 1987). Véase también "La oposición política partidaria en el régimen militar chileno. Un proceso de aprendizaje para la transición", en M. Cavarozzi y M. A. Garretón, *Muerte y resurrección. Los partidos políticos en el autoritarismo y las transiciones del cono sur* (Santiago: Flacso, 1989).
8. Por ejemplo, E. Tironi en *Autoritarismo, modernización y marginalidad* (Santiago: SUR, 1990).
9. El argumento populista no logrará, sin embargo, desafiar seriamente la sociología de la modernización: la exclusión social seguirá produciendo actores con escaso potencial de historicidad; inversamente, el principio de historicidad seguirá firmemente radicado en los intelectuales que sostienen y saturan la mayor parte de las experiencias de organización popular.
10. Véase L. Razeto, *Economía popular de solidaridad* (Santiago: Area Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Chile, 1986), p. 35.
11. Especialmente en G. Salazar, *Violencia política popular en las "grandes alamedas. Santiago de Chile 1947-1987* (Santiago: SUR, 1990).
12. Una descripción detallada de la simbólica populista excede las pretensiones de este trabajo.
13. La conexión entre feminismo y movimiento popular no dio nunca mayores resultados, como no sea la dignificación de la mujer, vale decir, el reconocimiento de su función económica dentro del hogar popular, la crítica de la violencia doméstica o la recuperación de cierto control sobre el uso del cuerpo.
14. La vigencia de una cultura popular que se despliega al margen de los esfuerzos de racionalización tanto sistémicos como historicistas, es materia de una reflexión aparte. El error en este caso consiste en dar por sentada la existencia de un sujeto popular racionalmente orientado ya sea hacia la integración social (sociología funcionalista), ya sea hacia la contestación social (sociología del conflicto).
15. En F. Dubet, E. Tironi, V. Espinoza y E. Valenzuela, *Pobladores: luttres sociales et démocratie au Chili* (París: L'Harmattan, 1989), pp. 89-90.
16. La represión como mecanismo de socialización política ha sido mencionada muchas veces: se trata de un caso de "efecto boomerang" en el cual la represión produce movilización política, efecto contrario del esperado.

17. Véase Juan Lemuñir Epuyao, *Crónicas de La Victoria. Testimonios de un poblador* (Santiago: Cenpro, Ediciones Documentas, 1990).

18. Para una interpretación populista de las protestas, véase también C. Schneider, "La movilización de las bases: poblaciones marginales y resistencia en Chile autoritario", *Proposiciones* 19 (Santiago: SUR, 1990). La interpretación de Salazar está basada en dos puntos: (a) la capacidad del gobierno militar de neutralizar la protesta mesocrática a través de una apertura que otorga a esos grupos la "conducción aparente de la transición"; y (b) la presencia de un "excedente de energía histórica" que permitió continuar con las protestas populares hasta 1987 por lo menos (pp. 384 y ss.). Esta tesis de un protagonismo histórico del mundo popular traicionado por las elites se contradice habitualmente a sí mismo. Salazar, por ejemplo, culpa del fracaso de la movilización popular a la "persistente acrimonia y el desinterés ejercitados por la alta intelectualidad chilena frente a las necesidades teóricas específicas del movimiento popular [que] han provocado en éste un déficit de formalización política cuyo único resultado registrable ha sido la rutinización secular del movimiento VPP" (pp. 390) (vale decir, de la protesta sin eficacia política). El protagonismo popular depende, por lo tanto, de la capacidad de las elites de constituirlo políticamente: el "protagonismo popular" es menos un hecho histórico, como se pretende, y mucho más una orientación normativa de los actores políticos e intelectuales. El argumento populista termina dejando las cosas como estaban, es decir, depositando el principio de historicidad fuera del mundo popular, puesto que lo que falla en éste --el pasaje a la política-- es justamente lo que define al sujeto histórico.

19. Véase el desplazamiento del Partido Comunista desde el mundo sindical hacia el mundo de los pobladores, como asimismo la importancia relativa de los partidos que nunca tuvieron audiencia sindical (MIR, MAPU, IC).

20. Hubo muy poco "motín de subsistencia" como en las grandes revueltas del tipo "quebra-quebra" que han asolado las capitales latinoamericanas en períodos de ajuste estructural: la violencia difusa en las protestas chilenas fue casi toda de carácter más bien delincuencial.

21. Sendero Luminoso apareció públicamente de la misma manera en 1980.

22. Puede compararse provechosamente esta actitud con el radicalismo de los jóvenes maoistas franceses que actuaron en los setenta: en este caso, el pasaje a la violencia no se produjo en gran medida por la tutela de Sartre (a quien se acostumbra a vilipendiar en nuestros días). Las consecuencias radicales de *La crítica de la razón dialéctica* o de la teoría crítica alemana fueron claramente entrevistadas por sus propios autores, quienes retrocedieron unánimemente frente a ellas. Los teólogos de la liberación, en cambio, dieron confiadamente el paso adelante.

23. Aunque los militantes radicales de las poblaciones terminaron a regañadientes por inscribirse en los registros electorales y votar en el plebiscito de 1988.

24. Véase Claus Offe, "La democracia competitiva de partidos y las limitaciones históricas del estado de bienestar keynesiano", en *Parlamento y democracia* (Madrid: Editorial Pablo Iglesias, 1982).

25. Los partidos suelen diferir, no obstante, de la organización burocrática convencional en algunos puntos: (a) carecen de un mando unificado, vale decir, son organizaciones que suelen tener más de una cabeza; (b) el principio de legitimidad del mando proviene muchas veces fuera de la organización: radica en las virtudes carismáticas del líder, vale decir, en su capital electoral propio; (c) carecen de una estructura jerárquica de mando y movilizan apoyo interno de acuerdo a lealtades, prebendas e incluso contratación de agentes electorales.

26. No todos los partidos caen dentro de esta caracterización. Véase Alvaro Böhme y Carmen Barrera, "Estructuras y militancias del Partido Demócratacristiano y el Partido Por la Democracia", *Proposiciones* 20 (Santiago: SUR, 1991), en que se contraponen "partidos de masas" y "partidos de notables", atribuyendo al PDC un comportamiento tradicional basado en la participación y el debate.

27. La debilidad de la participación política y de la estructura partidaria puede tener consecuencias delicadas para la estabilización del sistema político: los partidos, en efecto, están continuamente amenazados por *outsiders* que ocupan las mismas técnicas de legitimación.

28. Varios de los motivos de la actitud sindical frente al sistema político se analizan en F. Echeverría y J. Rojas, *Añoranzas, sueños y realidades. Dirigentes sindicales hablan de la transición* (Santiago: SUR, 1991).

29. Es lo que ocurre con todos los "partidos de trabajadores": por ejemplo, la COB boliviana y recientemente el PT brasileño, que operan en la periferia del sistema institucional.

30. Debe advertirse que esta identidad no está constituida tanto en un proyecto como en una experiencia común. Por lo demás, ambas cosas suelen contraponerse: el énfasis leninista en un proyecto revolucionario lleva necesariamente a la formación del partido-vanguardia: un partido de cuadros o de profesionales desligado de la experiencia obrera. Inversamente, los partidos obreros, en el sentido de partidos constituidos en torno a la experiencia del trabajo industrial, suelen ser radicales en su primera fase y reformistas cuando encuentran acceso al sistema político.

31. El Partido Comunista fue siempre un partido poco apto para la formación de gobiernos de coalición, incluso cuando los mismos comunistas buscaban dicha concertación.

32. Este es precisamente el cálculo de un dirigente forestal entrevistado por Echeverría y Rojas (1991): "Si nos remontamos al año 73, este sector exportaba algo así como 42 mil dólares en rollizos o en otros productos. Actualmente se agrega otro producto, que es la astilla o "chips", y se está llegando a los 900 o 1000 millones de dólares anuales. De tal manera que cualquier empresa forestal está en condiciones de ayudar a sus trabajadores, de mejorar sus condiciones de vida, el sistema de vivienda, la salud, la educación . . . Tienen tanto . . . que debería haber una forma más racional de invertir la riqueza en sus *colaboradores* que son los trabajadores". Caupolicán Pavez, Presidente de la Confederación Forestal en Concepción.

33. Aunque obviamente no de la dirigencia sindical: no se conocen adhesiones importantes del sindicalismo al errazurismo chileno.